

San Miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo además presente:

PRIMERO: Que se han alzado en apelación en contra de la sentencia de primer grado, tanto la demandada como la demandante, quien se adhirió a la apelación de la primera.

SEGUNDO: Que, del mérito de la prueba rendida en autos, analizada detalladamente en el fundamento décimo séptimo del fallo en alzada, se encuentra establecida la existencia del contrato de compraventa, que es negado por la demandada, conclusión a la que se ha llegado luego del análisis ponderado de la totalidad de la prueba aportada.

A ello debe unirse, la prueba consistente en la querella por apropiación indebida, que obra en autos y que la parte demandada presentó en contra de Iván Ibaceta ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, el siete de diciembre del año dos mil quince, por estafas reiteradas, y que a propósito del hecho descrito en ella como “HECHO 5” que afectó al demandante, refiere que Ibaceta luego de exhibirle a Vargas Yupanqui, un chasis sin carrocería, señalándole que era el que le correspondía, hizo que el 05 de noviembre de 2013, este firmara el documento denominado “cierre de negocio”, y le entregara la suma de \$ 46.000.000 mediante un cheque a nombre de Ibaceta quien nunca ingresó a INRECAR S.A. dicho cierre de negocio, sin que se iniciara la producción del microbús y tampoco ingresó los dineros entregados como pie del precio de venta.

Y agregó que con ello Ibaceta Sepúlveda, también engaño a INRECAR S.A., toda vez que al omitir la entrega del cierre de negocio y no entregar el dinero pagado como pie, *“y al estar actuando en representación de INRECAR S.A.”* hizo creer a ésta última que no tenía ninguna obligación comercial con VARGAS YUPANGUI, *“cuando si obligó a ésta ante el cliente, obligándola a cumplir con el contrato de venta,”* del que estaba en desconocimiento.

TERCERO: Que de este modo entonces es la propia demandada quien ha reconocido la forma de operar de la empresa y las obligaciones



que contrajo por las actuaciones de su vendedor conforme el desarrollo de sus negocios.

CUARTO: Que en cuanto a los reajustes de las sumas ordenadas pagar, el monto a restituir se reajustará desde el cinco de noviembre de dos mil trece, es decir desde la fecha del pago, tal como la fija el fallo en alzada, conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor entre la referida fecha y hasta su pago efectivo y por su parte la suma ordenada pagar por concepto de daño moral será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

Por su parte, el interés a pagar, respecto de ambas sumas, corresponde al corriente para operaciones de dinero reajustables, a contar de la fecha en que el deudor se encuentre en mora de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de dos de junio de dos mil veinte, dictada en la causa Rol C-4767-2018, del 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, **con declaración** que el reajuste, respecto de la suma ordenada restituir, es el que corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el cinco de noviembre de dos mil trece, y la época de su pago efectivo; y el reajuste de la indemnización por daño moral es el correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia y la de su pago efectivo y que el interés a pagar por la demandada es el corriente para operaciones de dinero reajustables, a contar de la fecha en que se encuentre en mora de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia;

Se previene que la ministra señora Claudia Lazen M. concurre a la confirmatoria del fallo en alzada, pero estuvo por rebajar la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, puesto que conforme los antecedentes aportados a la causa la situación vivida por la demandante generada por el incumplimiento contractual de la



sociedad demandada, implicó trastornos extra patrimoniales generando aflicción y problemas de salud que exceden las simples molestias. Ahora bien, la sentencia de primer grado ordenó el pago de dieciséis millones de pesos (\$16.000.000) suma que a la luz del informe pericial y declaraciones de los testigos aparece desproporcionada, por lo que estuvo por reducirla a la cantidad de cinco millones de pesos (\$ 5.000.000).

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra señora Escanilla y la prevención de su autora.

N° 1159-2020 Civil.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.

No firma la Ministra señora Pizarro por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Carmen Gloria Escanilla P., Claudia Lazen M. San miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

En San miguel, a treinta de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

